

## ¿QUE SE JUEGA EN LAS ELECCIONES?

Notas provisórias para un debate sobre los deberes  
de la Ciencia Política y de los empresarios

*Gonzalo Ibáñez Santa María*

Profesor de Filosofía del Derecho

Universidad Católica de Chile y Universidad Gabriela Mistral

Algunas semanas antes del plebiscito del 5 de octubre de 1988, más exactamente el día 20 de agosto del año en curso, apareció en *El Mercurio* un artículo de Joaquín Lavín titulado *Adiós al país del "cara o sello"*. En él reconocía que, en lo que se avecinaba, había algo que no le gustaba "...el que el destino de Chile se juegue al todo o nada en una elección". Por eso, concluía: "Hoy tenemos que hacer un compromiso formal: no podemos permitir nunca más que el destino de Chile se juegue en una elección. Que ésta sea la última vez". A pesar de la publicidad, el artículo en cuestión, por lo menos en lo que a los párrafos transcritos respecta, no tuvo mayores comentarios: ¿había acuerdo sobre su contenido? Formulo esta pregunta, pues lo que afirma Joaquín Lavín es muy curioso y sorprendente; por mucho que se rebusque en la Constitución y en las leyes, en ninguna parte está establecido que el país ha de jugarse su futuro en las elecciones, ni menos en un plebiscito. ¿De dónde, entonces, sacó tal idea?

La verdad es que, sobre todo en los sectores de derecha, esta idea está de tal modo asentada, que su reiteración constituye un verdadero tic nervioso; a cada instante sus personeros la sacan a relucir. No es del caso atiborrarnos de ejemplos. Citemos, con todo, algunos de cierta relevancia. El más grave, sin duda, fue el que proporcionó, el 21 de septiembre pasado, el mismo Ministro del Interior de entonces, don Sergio Fernández, al afirmar en declaración pública que "cuando faltan pocos días para que el país resuelva sobre su futuro, el

Gobierno llama a cada chilena y a cada chileno a detenerse un momento a reflexionar acerca de cuál será ese futuro y cómo él depende de aquello que cada uno decida en el plebiscito..." A continuación el Ministro daba cuenta de cómo la opción "no" aparecía absorbida por la izquierda marxista y, sobre esa base, concluía: "¡Cada voto por el 'no' es un paso hacia la reedición de la Unidad Popular! ¡Cada voto por el 'sí' es un paso a la democracia!" Tal declaración mereció de mi modestísima parte una respuesta publicada también en *El Mercurio* y que adjunto a este trabajo.

Sin embargo, ese mismo matutino el día 5 de octubre editorializaba diciendo: "Es imposible no reconocer, entonces, que en la decisión de hoy está en juego mucho más que el nombre del candidato", y concluía: "El futuro de nuestra patria y el de cada uno de los chilenos dependerá de la decisión que hoy se adopte". El diario *La Nación*, por su parte, titulaba en primera plana: *¡Chile elige entre democracia o socialismo!*

Pasado el plebiscito y conocido el resultado, nadie, en el bando perdedor —en el cual, por lo demás, me inscribo—, reconocía que el país se había jugado al cara o sello, o que correspondía ceder el paso a la Unidad Popular o al socialismo. Fue el momento en que muchos, recién, cayeron en cuenta de que la cédula electoral sólo decía:

*Augusto Pinochet Ugarte*

*Sí No*

Joaquín Lavín al día siguiente del plebiscito reflexionaba en *El Mercurio*:

"Sería absurdo pensar que sus habitantes (de Curicó, Concepción o Copiapó) votaron contra los frigoríficos, contra los bosques o contra los parronales". El plebiscito, entonces, no había tenido otra efecto que el establecido estrictamente por la Constitución. Con todo, la mentalidad no cambia: *el destino del país no está jugado aún, porque se lo jugará en las próximas elecciones presidenciales.*

El mismo Lavín titulaba el recién mencionado artículo: *Una batalla, pero no la guerra*, lo cual es altamente significativo. El Partido Renovación Nacional señalaba en una declaración postplebiscito: "La opción 'No' ha alcanzado una mayoría en el plebiscito. *Sin embargo, el futuro de Chile no está resuelto.* En diciembre de 1989, como lo dispone la Constitución Política, deberá realizarse la elección de Presidente de la República, conjuntamente con la de Congreso Nacional" (*El Mercurio*, 7 de octubre/88. Subrayado por mí). Arturo Fontaine Aldunate, en su columna de *Ercilla*, escribía: "En los catorce meses y tanto que faltan para la transferencia del poder a las autoridades elegidas el 14 de diciembre de 1989, la disyuntiva no será más entre el 'sí' y el 'no' que valían para el plebiscito. En estos meses la ciudadanía habrá de elegir entre el camino de la sociedad libre y el de las fórmulas socializantes o socialistas que plantean los proyectos políticos de los partidos de centroizquierda y de izquierda" (semana del 19 al 25 de octubre/88). Podemos estar ciertos, con todo, que de perder la derecha la elección presidencial, se las arreglará para insistir: *¡a la próxima si que va en serio; en ésa, Chile se jugará su destino!* Lavín, por lo menos, se da cuenta del problema: "La verdadera tarea es dar a Chile una democracia estable, en la que se pueda elegir entre opciones moderadas, en que podamos ganar y, especialmente, en que podamos perder tranquilos, sabiendo que las instituciones básicas permanecen, y que la vida no va a cambiar por un resultado electoral" (*El Mercurio*, 13 de octubre/88).

El primer paso para cumplir con esta tarea consiste en saber sí, realmente, el destino patrio es algo que se juegue en las elecciones. Desde luego, como decía

más arriba, no hay ningún indicio en nuestra legislación actual, ni en la preterita, que dé pie para semejante conclusión. Pero, al margen de lo que dispongan las leyes, en el hecho ¿será o no jugable ese destino en elecciones? Mi parecer es que la sola circunstancia de plantearse el tema es indicio de irresponsabilidad o de debilidad mental. ¿Qué entenderán por destino nacional los que pretenden ponerlo en el juego electoral? ¿De dónde obtendrá poder una mayoría para comprometer a las generaciones futuras o para imprimir a la nación el rumbo que quiera? ¿Es que puede hacer lo que se le dé la gana con el legado de los antepasados? ¿O con el esfuerzo cotidiano de los que habitan hoy una nación? El destino nacional es como el destino personal. Hay algunos que gustan de jugarlo a la lotería, a la ruleta o a la especulación bursátil. ¿Son prudentes al hacerlo así? La gente sensata prefiere, en cambio, desarrollar un poco la paciencia y labrarse paso a paso ese destino con el esfuerzo diario, con el trabajo constante, con el cumplimiento cabal de las responsabilidades. ¿Es posible que ese esfuerzo, a veces ímprobo y heroico, que, por lo demás, va efectivamente construyendo el destino nacional, pueda estar sujeto a los avatares de una elección? Creo, sencillamente, que es una locura. Lo cual, por supuesto, no significa negar la existencia válida de elecciones en una sociedad, pero no para decidir asuntos de esta envergadura.

Quienes aquí hemos citado, y los sectores que ellos representan, disponen de la inteligencia suficiente para darse cuenta cabal de cuán cierto es lo que acabamos de afirmar. ¿Qué hay, entonces, tras el error que comentamos? A mi juicio, copulativa o disyuntivamente hay tres motivos que podemos ahora enunciar, pero no tratar con toda la extensión y profundidad que serían deseables. El primero es una cierta *presunción*: ¡Qué maravilla sentir que el destino de la nación está atado al hecho de que me elijan a mí y a mi grupo! Todo carece de importancia frente al hecho de *mí* elección, que asegura la felicidad del pueblo. En esta perspectiva es más importante la elección que la acción gu-

bernativa posterior. Y si se elige a otro: pase lo que pase, eso será el caos, el derrumbe económico, etc. En segundo lugar, no puede dejar de señalarse un cierto *relativismo*: si a las elecciones se les da el alcance que comentamos, es porque se reconoce que ellas constituyen la última instancia decisoria acerca de lo que debe hacerse o no hacerse desde el poder; en esta hipótesis, quien gane, hace de su voluntad, por el solo hecho de ganar, la voluntad decisoria. No hay, por ende, principios que acatar, sino una voluntad que expresar. A la derecha ciertamente le gusta que en el país reine el orden tradicional de las sociedades occidentales, pero no está dispuesta a jugarse por sus fundamentos más allá de los resultados electorales; así, por lo demás, queda moralmente con las manos libres, en caso de triunfo, para dar a éste el contenido que quiera. Por eso, en el fondo, su relativismo moral es similar al de la izquierda. Por último, hay una dosis importante de *flojera*: reducir las alternativas a términos tan simples libera de la necesidad de *demostrar* las bondades de lo que se postula, de hacer ciencia política. El país ya lo sabe: si ganamos nosotros, todo irá bien; si ganan los otros, todo irá mal.

Cumplir con la tarea que señala Lavín no es, pues, sólo una cuestión de reformas electorales, como éste señalaba en el primer artículo a que hacíamos mención. En él elogia el proyecto presentado por el entonces Ministro Fernández sobre los distritos electorales, pues así habría pocas colectividades y todas con proyectos moderados. Desde luego, cabe hacer notar que en el plebiscito se enfrentaron sólo dos grandes corrientes, lo cual no fue óbice para que se proclamara que de triunfar la opción contraria a la de uno el caos o la injusticia, según el caso, se entronizarían: ¿por qué no habría de proclamarse lo mismo frente a elecciones parlamentarias a dos bandas, o a tres como máximo?

La tarea, en verdad, parece como una cuestión de determinaciones personales, porque en las elecciones se deciden las cosas que se quiere que se decidan en ellas. Son peligrosas, por ende, cuando aquellos entre los cuales se realizan están dispuestos a aceptar como

determinables electoralmente hasta las mismas bases de la organización social. En este caso, el problema es más profundo de lo que parece. Es muy probable que en Chile la modernización electoral se haya quedado atrás; pero, si es cierto que vamos a asignarles a las elecciones un alcance tan vasto, mucho más atrás se ha quedado la modernización cultural a secas. Porque, en un país donde cuestiones de la más alta importancia y gravedad se juegan a una lotería electoral, es un país culturalmente atrasado que todavía toma en serio las ideas del liberalismo decimonónico, para el cual nada tiene validez objetiva; todo es determinable por elecciones: "un hombre, un voto", y... vamos votando.

La tarea, entonces, junto con ser una cuestión de decisión personal, es decir, una cuestión moral, es también una cuestión cultural e intelectual. ¿Tiene el orden político alguna consistencia propia o queda enteramente entregado al pacto entre los miembros de la sociedad expresado en el resultado electoral? No es del caso tratar de resolver el fondo de la cuestión en esta oportunidad, pero sí subrayar que, por lo visto, todavía estamos anclados en los presupuestos ideológicos del contractualismo rousseauiano, y que la ciencia política contemporánea no se atreve o no quiere romper con este esquema, que impide cualquier solución razonable a nuestra dificultad.

El dogma es el siguiente: a mayor libertad, mayor bondad, por lo que nunca es justificable moralmente entabrar la libertad, que así es erigida en el bien fundamental de la vida humana. De estas premisas, fluye la conclusión: el hombre es un centro de privilegios y de derechos y la finalidad de su vida es hacerlos realidad. Para eso forma la sociedad, como un medio para resolver sus individuales problemas e insatisfacciones. Como dice el ginebrino, la cuestión consiste ahora en "encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado y donde cada uno sea tan libre como antes y no se obedezca más que a sí mismo". *Ser plenamente libre, pues ello garantiza la perfecta bondad, y, a la vez, estar de-*

*fendido y servido por la sociedad.* No otro es el meollo del discurso de nuestros "políticos". ¿No los oímos cómo ensalzan la libertad hasta ponerla por los cuernos de la luna y cómo reclaman de cualquier limitación que pueda sufrir, aunque sea plenamente justificada? ¿No los oímos ofrecer este mundo y el otro y adular constantemente a los electores? ¿Quién recuerda los deberes; quién habla del bien común como una obra común y no sólo como una estación de servicios...?

A la hora de compaginar las libertades individuales —lo cual significa limitarlas—, a la hora de cumplir con las promesas, empiezan las dificultades. Pero la solución es la misma que la de Rousseau, esto es, el recurso a la *voluntad general* considerada como la expresión íntima y real de la voluntad y libertad de cada uno, por lo que las limitaciones que ella establezca han de reputarse expresión de la libertad de todos: no son impuestas sino queridas. No darles curso, significaría negar la libertad. Es el sacrificio de las libertades concretas, modestas, limitadas, pero existentes en el área de la "gran" libertad, la libertad mítica, enorme, pero irreal, salvo para aquellos que han triunfado en la lucha para ser el oráculo de la voluntad general. Si nos fijamos en el discurso político corriente en nuestra patria apreciaremos cómo éste se presenta desprovisto de argumentos que no sean la referencia a esa voluntad, sea bajo el nombre de mayoritaria, de abrumadora, de popular o de silenciosa. Actitud tras la cual subyace la idea rousseauiana de que si algo lo quiere "el pueblo" es, por ese solo hecho, algo bueno, justo o verdadero: "... el soberano, por el solo hecho de serlo, es siempre lo que debe ser".

Una ciencia política consciente de su dignidad y de sus responsabilidades no puede seguir avalando estas ideas. Urge explicar los fundamentos del orden político, con los deberes y libertades que a cada uno le corresponden, explicando a la vez el distinto papel que juegan las autoridades y los súbditos. De una vez por todas, no hay que temer hablar de deberes ni de súbditos. Ni de que la función de gobierno no corresponde a

estos últimos sino a los gobernantes, que no pueden, por otra parte, descargar sus responsabilidades alegando un inexistente papel de mandatario de la voluntad popular. Los súbditos tienen el deber de obedecer, pero derecho sagrado de ellos es el de recibir un buen gobierno. Ni, por último, de que estos principios son válidos, sea cual fuere la forma de gobierno que se adopte: democracia, aristocracia o monarquía.

En lo que a nuestro tema se refiere, no me parece osado concluir que la afirmación de que "en las próximas elecciones (sobre todo si en las anteriores se ha perdido) se define el futuro de la patria" implica una falta de respeto al esfuerzo cotidiano que realizamos en el cumplimiento de nuestros deberes personales, cuyos frutos se ven así amenazados por el resultado de una verdadera lotería. Por otra parte, supone negar la capacidad intelectual de la persona humana para encontrar en nuestra propia naturaleza y experiencia las bases del orden político. Supone dejar entregada la solución de nuestras controversias a un argumento tan irracional como es el del número. En las elecciones pueden ponerse en juego las personas, pero no los países; menos aún las generaciones futuras. Atribuir a las elecciones el efecto que comentamos, sobre todo por quienes ejercen cargos de gobierno, significa, además, un acto de verdadera sedición, pues para ello es menester asumir poderes que no se tienen y que la Constitución no concede a nadie.

Si verdaderamente queremos que la nuestra sea una "sociedad de personas" hemos de empezar por asumir nuestra condición de tales y no rehuir los deberes que nos vienen impuestos por el hecho de estar dotados de inteligencia. Esto significa que, cuando se habla de elecciones, no sólo ha de definirse, pues, quiénes pueden participar en ellas sino también qué se puede y qué no se puede lícitamente dejar entregado a sus resultados. Me parece que quienes se dedican al cultivo de la ciencia política pueden ver en esta tarea uno de los imperativos más urgentes que plantea la hora presente.

*¡Cuidado con la economía!*

Este es el título de otro de los documentos que publicó Joaquín Lavín en *El Mercurio* poco después de celebrado el plebiscito; en este caso, el día 20 de octubre. En él expone la tesis siguiente: *Si el plebiscito hubiera significado que el "no" comenzara a gobernar de inmediato, los efectos económicos habrían sido mayores.* Esto lo afirma porque, a raíz de la derrota sufrida por la postulación del general Pinochet, la economía chilena habría entrado en un período de recesión que podría haber sido mayor si no fuera porque no todo se había perdido (queda por delante la elección presidencial) y por la relativa moderación mostrada por los vencedores, partidarios en una medida importante de modelos más bien socialistas.

Interesa destacar que esta recesión —real o aparente; grande o pequeña— no se produjo porque se hubieran tomado medidas macroeconómicas erróneas o porque hubiesen sobrevenido cataclismos o catástrofes de índole natural, sino por una decisión de los empresarios que, asustados por el resultado electoral, habrían retraído la inversión. Este es un punto de la máxima importancia, pues, por lo visto, el fenómeno puede repetirse en el futuro y en una escala mucho mayor, que es lo que asusta a Lavín.

El hecho que comentamos, de ser cierto, muestra un verdadero chantaje; o el país vota por el candidato de los empresarios o, de lo contrario, éstos retiran sus capitales y, eventualmente, ellos mismos se ponen en posición de emigrar. En pocas palabras: tales empresarios no estarían dispuestos a aceptar *para ellos* cualquier experimento, pero sí para el país.

Esta conclusión es grave, porque supone una visión deformada de la democracia. Desde luego, los empresarios en cuestión habitualmente se proclaman demócratas convencidos; sin embargo, la actitud que comentamos revela que su adhesión hacia esa forma de gobierno es puramente verbal y que, en el fondo, ella les causa la más profunda de las desconfianzas; es que se dan cuenta de que no cualquier resultado electoral es conveniente para el país. En el hecho,

están entre la espada y la pared: si no proclaman su adhesión a la democracia, son cubiertos por los peores improprios; si la proclaman, ven con pavor sus posibles resultados.

La verdad es que éste es un falso problema, ya que tras él yace la errónea conceptualización de la democracia a que hacíamos mención más arriba, esto es, el régimen en el que el país, y no sólo las personas, se pone en el juego electoral. Esta versión de la democracia es inaceptable, pues conduce a los países a una insostenible situación de guerra civil. Si los empresarios partieran de la base de que en la democracia y en las elecciones consiguientes no se pone en juego al país ni los fundamentos de un buen orden político y económico, su posición sería otra. Pero para ello hay que comenzar por adoptar las decisiones personales, intelectuales y morales, de que habláramos más arriba.

Adoptarlas es, por lo demás, la condición fundamental para asegurar la viabilidad de la democracia en Chile. Si quien triunfa en unas elecciones se siente con la legitimidad suficiente para hacer lo que se le dé la gana con el poder, el país y la misma democracia han firmado su sentencia de muerte; en el caso de esta última, la experiencia del régimen de Allende es ilustrativa. Si, en cambio, se advierte previamente al triunfador de que sí, de que gozará del poder, pero no para hacer lo que quiera, sino para *gobernar* según lo que el sentido común entiende por tal, hay muchas probabilidades de que sea prudente y moderado en su gestión; sólo así, como pide Lavín, podremos perder con tranquilidad. Si hemos aceptado vivir en democracia no es lícito condenar a priori el triunfo electoral del contendor: está dentro de las posibilidades del legítimo juego democrático; pero ello de ninguna manera significa aceptar que aquél o, eventualmente, el propio candidato, si triunfa, puede tomar pie en su triunfo para abusar de su poder.

A este respecto, la obligación de los empresarios es similar a la que tiene cualquier miembro de la sociedad política: en primer lugar, respetar el triunfo de quien obtenga el mayor número de votos; en seguida, cumplir cabalmente

con los deberes propios del lugar que cada uno ocupa en la sociedad y de la función que en ella cumple; en su caso, por ejemplo, hacer todas las inversiones que su actividad requiera y para las cuales tengan capacidad. Estar alerta, por último, para oponerse a cualquier abuso de poder y, eventualmente, ejercer la facultad moral de rebelión para dotarse del buen gobierno que el país y todos sus habitantes puedan necesitar.

Si los empresarios quieren "pasarse de listos", esto es, si a pesar de todo, les gusta aparecer respaldando un sentido de la democracia como el que en estas líneas hemos criticado y, a la vez, no quieren arriesgarse a perder las elecciones —para lo cual echan mano, por ejemplo, a las "campanas del terror"—, que no les quepa dudas de que al final terminarán como los peces: muriendo por la boca.